

EL ANÁLISIS

Un 33% de españoles paga y mantiene al resto



610,8 KM.

Martí Saballs
@marti_saballs

A 1 de julio de 2016, última fecha disponible por el INE, había 46.468.102 españoles. De ellos, 4.396.871 de origen extranjero. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), trabajaban 18.508.000, un 39,8%. Del conjunto de cotizantes, 2.986.100 son empleados públicos, un 16,13%. Hay, por consiguiente, 15.521.900 empleos que dependen del sector privado. Sin entrar en algunos leves matices, podemos afirmar que un 33,48% de la población mantiene al resto.

Unos números más. También a 1 de julio, en España había 8,7 millones de personas mayores de 65 años. Cobran pensión, donde se incluyen más casos independientemente de la edad, 9.474.556 ciudadanos. Hay 8,77 millones de españoles por debajo de 18 años y 4,23 millones de parados. El INE estima que el número de españoles en el año 2030 será de 45,8 millones. Cada diez años, el número de pensionistas puede aumentar en un millón. Hay más esperanza de vida y sigue reduciéndose la natalidad.

Elaborar presupuestos del Estado

en el año 2017, como lo será en el 2018 o 2019, no da para grandes márgenes de maniobra. El país está maniatado por su estructura social, laboral y demográfica. Una bomba lista para explotar si no se toman medidas para corregirla. Los cimientos del estado del Bienestar en España están sujetos sobre barro. Cualquier terremoto económico que sacuda el subsuelo puede derrumbarlo con virulencia. Salvamos la última crisis. Sobrevivimos sacando la cabeza del agua cuando estaba a punto de hundirse en 2012. Se han curado las heridas superficiales, se ha luchado contra corriente y se ha improvisado bien; pero la infección de fondo sigue sin curarse. El esfuerzo realizado por las familias y las empresas que han capeado bien el temporal debe afianzarse cara al futuro.

Destinar un 40,7% del gasto público, procedente de los impuestos que pagamos ciudadanos y empresas, a pagar pensiones es un exceso. Si no se toma ninguna medida, es un porcentaje que tenderá a incrementarse en los próximos años. El debate empezó hace tiempo y el número de propuestas es múltiple: desde retrasar la edad de jubilación hasta buscar un nuevo sistema de financiación para las personas que deciden dejar de trabajar o son prejubiladas por sus empresas. Ahora falta el consen-

so político necesario y la voluntad y liderazgo para enfrentarse al problema y defender sus posibles costes a corto plazo. Recuerdo que el primer sistema de pensiones público lo implantó Alemania en 1889, con la edad de jubilación en 70 años, a la que llegaban escasos habitantes. Cuando su canciller, Otto von Bismarck lo impulsó, tenía 74 años. En 1916, en Alemania se redujo la edad de jubilarse a 65 años. Estamos en otros tiempos. Hace cien años Europa estaba en guerra y se empezaba a trabajar mucho antes que ahora.

Si a la cantidad destinada a pagar pensiones agregamos otro 15% más de destinado a cubrir otras presta-

ciones sociales y el cobro del desempleo, que representa un 5,33% del total del gasto, el Estado –no se tiene en cuenta otras prestaciones de las administraciones locales y autonómicas– destina un 55% de su gasto público a subvencionar directamente clases pasivas y dependientes (aunque en estas partidas también está incluido el fomento del empleo).

La partida de gastos goza de otro desequilibrio importante: la deuda pública. En 2008, la deuda del Estado sumaba 358.400 millones de euros. En 2017 esta cifra es de 968.000 millones, que se espere acabe representando un 98,8% del PIB. El Estado paga en intereses de la deuda

32.171 millones de euros, la segunda partida más importante: un 9,3% del gasto. Cualquier próximo repunte de los tipos de interés podría volver a incrementar el pago de intereses. Los intereses de la deuda, las subvenciones a la dependencia y al empleo y las pensiones suman más de dos terceras partes del gasto de los presupuestos. ¿El resto? Sanidad, educación, seguridad y defensa, agricultura y medio ambiente, justicia, inversiones diversas, transferencias autonómicas y otras partidas, como específica detenidamente hoy el ejemplar del diario que tiene en sus manos.

Cualquier estrategia a largo plazo para modelar un estado del Bienestar mejorado y que no dejé de ser justo pasa por determinar la futura empleabilidad de los ciudadanos y el valor del trabajo. No podemos inventarnos decenas de miles de ingenieros, expertos en inteligencia artificial y biogenetistas en cuatro días. Nuestros gobernantes tampoco pueden seguir presionando a las empresas y ciudadanos con más impuestos, directos e indirectos, de los que ya hay establecidos. Si lo hicieran, acabarían por hundir el edificio. Los presupuestos para 2017 solucionan la gestión de mañana; pero avisan del peligro de pasado mañana.

Director adjunto de EXPANSIÓN



Poderse jubilar a los 65 años, una decisión con más de un siglo de historia.

Sigue el impulso de los vientos de cola

Juan Pedro
Marín Arrese

Estos Presupuestos nacen con un considerable viento de cola. La recuperación de la economía mantiene su elevado ritmo propulsando un nivel de ingresos jamás alcanzado, al tiempo que importantes desfases asociados a la crisis, tales como las indemnizaciones por desempleo, se reducen drásticamente. Nacen también, por primera vez en una década, sin la hipoteca de cubrir excesos de déficit incurridos en el ejercicio anterior, evitando así la necesidad de operar ajustes adicionales para devolver la senda de consolidación a la trayectoria comprometida.

Por lo demás, raras veces las cuentas públicas se reflejan en supuestos tan simples como los contemplados este año. El considerable esfuerzo de reducción del déficit para cumplir con el objetivo, cifrado en cerca de 15.000 millones, se cubriría por entero gracias a un incremento de in-

gresos por similar cuantía, preservando la envolvente de gastos un nivel similar al resultado de su ejecución en el pasado año. Todo ello, pese a incrementos en determinadas dotaciones y nuevas partidas sociales por importe de aproximadamente 4.000 millones, además de una elevación salarial para los empleados públicos de un 1%. Un resultado global que a primera vista se antoja la cuadratura del círculo, aunque su examen más detallado nos muestre su verosimilitud a poco que nada se tuerza.

El aspecto que despierta mayores dudas en esta ecuación reside en la previsión de ingresos por su falta de concordancia con un cuadro macroeconómico marcado por una extrema prudencia. Así, parece escasamente coherente una elevación de 7,3% en la recaudación del IVA con un consumo privado que modera su ritmo de expansión por más que el deflactor de 1,5% añada márgenes adicionales en términos nominales. Como tampoco resulta del todo convincente un sustancial crecimiento del 7,7% en IRPF, en un contexto de marcada moderación de las rentas

salariales, pese a una notable creación de empleo. La volatilidad de la tributación de sociedades permite contemplar variaciones de importancia como las consignadas de 12,6%, aun cuando el efecto escalón por los pagos a cuenta dejará de gravitar a partir de mediados de este año.

Ciertamente, la propia cautela con que se han plasmado las previsiones macroeconómicas, situadas en la parte más baja del espectro, permite augurar que tanto en crecimiento como en demanda interna las hipótesis avanzadas experimentarán seguramente un reajuste al alza a medida que avance el año. Pero, incluso contando con estos factores de ajuste, fiarlo todo a una progresión tan dinámica de los ingresos incorpora notables dosis de optimismo.

Con todo, el panorama no quedaría tan expuesto a potenciales desfases como pudiera pensarse. Muchas de las nuevas partidas o de las dotaciones adicionales de gasto resultarán difíciles de ejecutar en el escaso plazo de tiempo disponible, esterilizando así una parte nada despreciable de los compromisos teóricos transformados en colchón amorti-

guador de posibles insuficiencias. Todo indica pues que el objetivo de déficit podría cumplirse sin excesivos ahogos, limitando la propia entrada en vigor de los Presupuestos en una fase tan avanzada de su ejecución el riesgo de desviaciones asociado normalmente a su temprana elaboración.

Seguridad Social

El Presupuesto del Estado queda, también, blindado frente a contingencias que en años previos pesaron sobre su saldo de transferencias. Se evacúa el debate sobre la financiación de la Seguridad Social cubriendo con endeudamiento su previsible desequilibrio, decisión que permite limitar el impacto al traducirlo en un superior flujo de intereses futuros.

A su vez, la carga que ha supuesto en años previos la insuficiente dotación del Servicio Nacional de Empleo se minorará sensiblemente ante la sensible caída de la tasa de paro. Por su parte, el superior montante de financiación a las comunidades autónomas, cifrado en 5.000 millones antes de operar las liquidaciones, implica de facto una moderación significa-

tiva respecto a años anteriores en que el Estado se vio forzado a aportar cuantiosos fondos para cubrir sus maltrechas finanzas.

Si se cumplen las expectativas, se habrá conseguido compatibilizar una considerable contracción del déficit con un Presupuesto que evita cualquier recorte de gasto y todo incremento en la tributación nominal. No obstante, se dejará sin aprovechar una coyuntura particularmente favorable para reducir con mayor ambición nuestro déficit y anclar nuestra economía en puerto más seguro y cercano al equilibrio.

Los actuales vientos de cola podrían dejar de soplar en un futuro próximo a medida que se normalice la política monetaria y se endurezcan las condiciones crediticias, sin contar con posibles accidentes de recorrido. Urge, por ello, reducir lo antes posible un endeudamiento que sigue gravitando como principal amenaza tanto para las finanzas públicas como para la estabilidad de nuestra economía. Una advertencia que debería invitar a la cautela cuando se aborden las Cuentas del próximo año.

Economista